

	MES	TRIMESTRE
Madrid.....	10 rs.	30
Provincias.....	15	45
Extranjero.....	20	60
En las Antillas.....	25	75
En Filipinas.....	30	90
Número suelto, un real,		

Se insertan anuncios a razón de 25 céntimos línea y precios convencionales según las circunstancias de los mismos. También se admiten remitidos y comunicados a precios igualmente convencionales.

El Eco de España se publicará todos los días a excepción de los lunes y las grandes festividades del año.

# EL ECO DE ESPAÑA.

PERIÓDICO MODERADO

MADRID.—Viernes 7 de Marzo de 1873

NÚM. 936.

AÑO IV.

## CRONICA PARLAMENTARIA

¿Qué atmósfera rodea a los gobiernos? ¿Qué aire se respira en las alturas del poder, que hombres discretos en la oposición, más discretos aun en el hogar doméstico, oradores distinguidos y juriscónsultos eminentes, llegan al gobierno y padecen como alucinaciones temporales, que les impiden ver claro, resolver con acierto y tener la virilidad necesaria que da fuerza y autoridad a un mismo tiempo? Es un fenómeno sorprendente, pero que por lo repetido llega a ser casi ordinario.

No nos fijamos precisamente en el hecho de que se cambie de conducta en el gobierno. Ya sabemos que cuando en la oposición se predicaban sólo ideas de oposición, no es extraño que se varíe de conducta cuando se varía de oposición. Por ejemplo: los republicanos han estado predicando el respeto a la ley, la inflexibilidad de la ley en todo y para todo, y apenas se han hecho dueños del poder, unos piden el echar el consabido velo para gobernar como reyezuelos absolutos, y otros piden la completa disolución de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, plantel seguro de elecciones libres al uso de los republicanos y demás patriotas.

Pero no hablamos sólo de estas observaciones, sino de la conducta intrínseca del poder, gobernando y contestando en las Cámaras.

¿Cuántas censuras justas hemos oído en boca de los republicanos por la manera de conducirse los radicales en ciertas cuestiones. Y sin embargo, vienen al poder los republicanos, y cometen las mismas torpezas, sin necesidad y sin utilidad para la causa de su partido, que es en lo que consiste la verdadera torpeza, y sólo por complacer a las exigencias, al amor propio, o a las sospechas y recelos de partido.

Esto, ni más ni menos, ha sucedido en la cuestión del armamento y defensa proyectada por los vecinos de Madrid, bajo la dirección de los alcaides de barrio.

Desde el momento en que sobre esto se promovió cuestión, al primer indicio, a la primera pregunta debió contestar el Sr. Figueras lo que natural y espontáneamente contestó en la sesión de ayer al Sr. Suñer y Capdevila, y la cuestión hubiera quedado muerta y enterrada. El efecto moral se hubiera conseguido. Madrid hubiera tenido más tranquilidad, y no por eso hubiera habido un fusil más ni un fusil menos, porque los que tenían armas las conservarían. Los vecinos que se hayan combinado o se combinen para defenderse se defenderán. Ni el Gobierno ni el partido republicano han ganado en fuerza ni en prestigio por oponerse a la organización de los vecinos. Ha perdido la sociedad entera. Han ganado los fomentos, aunque deban andarse con cuidado, porque ayer mismo ha sido muerto un bandido en una casa que pretendía robar. Aconsejamos a todos los vecinos de Madrid que sigan este ejemplo.

La sesión de ayer se consagró a explicar su interrelación el señor marqués de Sardoal, relativa a este grave asunto.

El joven marqués pronunció dos discursos a cual mejor, el de explanación y el de réplica. Conceder del asunto, conceder de la ley y de otros antecedentes, como alcaide que ha sido de Madrid y por ende jefe de la Milicia ciudadana, hizo una exposición fiel de los hechos, probó la legalidad en el proceder de los vecinos de Madrid y desenvolvió todo su pensamiento con claridad, con energía, con una intención piadosa y fina, cautivando la atención de la Cámara con las agudezas, sentencias y razonamientos indestructibles de que sapicó sus dos discursos.

La descripción que hizo de los vecinos defendiéndose de los facinerosos, sus ideas sobre el derecho, sobre el hecho, sobre la situación, y la pintura que hizo y el efecto que de ella resultaba, fueron de primer orden.

El señor marqués de Sardoal crece como hombre de Parlamento. Es sereno, elástico, y castizo en la expresión: siempre encuentra la palabra precisa. Su triunfo de ayer es de los más legítimos.

La ausencia del Sr. Figueras de su asiento y la presencia del Sr. Castelar, nos hizo presumir que el Gobierno, conociendo sin duda que había ido muy allá en la primera escaramuza el presidente del poder ejecutivo, procurara recobrar el terreno perdido. Lejos de censurarle, lo hubiéramos aplaudido sin reserva, porque no hay nada tan funesto para un Gobierno, como obstinarse en el error conociéndolo.

El Sr. Castelar es un gran orador. Nosotros no le hemos de escatimar aplausos por sus notorios méritos. Lo encontramos muy resuelto en algunas de las cuestiones que trató; pero no estuvo tan varonil en el asunto principal, objeto del debate.

Cuando declaró que la ley y sólo la ley regularía la conducta del poder en la cuestión de renovación de Ayuntamiento, nos pareció muy superior a cuando se encerraba en generalidades y hasta sofismas para explicar cómo un ciudadano puede tener un fusil para su defensa personal y cómo no puede asociarse para hacer que la defensa personal sea al mismo tiempo colectiva y hasta social.

Si el Sr. Castelar hubiera hallado la cuestión intacta, estamos seguros de que la hubiera dirigido con valor y con tino. En la situación en que se encontraba y con las preocupaciones de su partido, hizo cuanto pudo; porque el talento superior tiene la misma cualidad que el oro: siempre es oro.

En honor de la verdad, debemos decir que el Sr. Suñer y Capdevila fué el verdadero ministro ayer. Con gran naturalidad y franqueza dijo que no encontraba nada censurable en el proyecto de organización para defenderse los vecinos de agresiones injustas, y que lo que debe-

rian hacer los republicanos verdaderos, era pertenecer a estas asociaciones, con lo cual verían por sus propios ojos, el móvil y el fin de los vecinos al agruparse, y se convencerían de que este fin era patriótico y los medios legales.

Después de este solemne debate, se entró en la órden del día, y el señor general Gándara pronunció un excelente discurso en contra del proyecto proponiendo la organización de 80 batallones de voluntarios. Las razones que desenvolió el Sr. Gándara son dignas de tomarse en cuenta y fueron oídas atentamente por la Cámara.

Hoy continuará esta discusión.

## PREDICACION FUNESTA

El Sr. Castelar dijo en su primer telegrama a los representantes de España en el extranjero, y después lo repitió en el *Memorandum*, que la república era el orden; manifestándose resuelto, por sí y a nombre de sus compañeros de gabinete, a defenderla a todo trance. En todos sus discursos pronunciados desde el banco ministerial, se ha mostrado partidario del orden a todo trance y desoso de que la república se consolidara, atrayéndose a las personas sensatas y a las clases conservadoras.

Altamente laudables eran los propósitos del Sr. Castelar, aun para los mismos republicanos, cuyo sistema político ganaría más adoptando las ideas vertidas por el actual ministro de Estado que con las amenazas y alarmas que alejan a las personas acomodadas y a las clases verdaderamente conservadoras. Estas también tenían que agradecer al Sr. Castelar su buen deseo y sus esfuerzos para conjurar la tempestad que amaga descargarse sobre ellas, si en vez de consolidarse la república aumenta el desorden y reina por todas partes la anarquía.

Mas todos esos discursos, todos esos buenos propósitos fueron desvirtuados y casi reducidos a la nulidad con su discurso de ayer, contestando a la interpelación del señor marqués de Sardoal. El Sr. Castelar, revestido del carácter de ministro de Estado, y llevando la voz del Gobierno, tuvo singular complacencia en separar y hacer dos cosas distintas, y no sólo distintas, sino poco menos que enemigas, al pueblo y a las clases conservadoras o acomodadas.

Según el Sr. Castelar, «las clases conservadoras no tienen derecho para dudar del pueblo de Madrid»; dijo que «el pueblo tampoco debe dudar de las clases conservadoras», y que era preciso que hubiese «gran armonía entre las clases conservadoras y el pueblo»; frases que, variadas o glosadas, repitió varias veces en su discurso.

Indudablemente el Sr. Castelar creyó prestar un gran servicio a todos; pero tienen que estarle muy poco agradecidas las clases conservadoras al favor que les quiso hacer. Su lenguaje sería hijo de un buen deseo, pero fué altamente anti-social y perturbador y anárquico, tanto como el que se hubiera podido emplear en un club de los más exagerados comunistas. ¿Qué significa, separar del nombre colectivo de pueblo y de su comprensión social a las clases conservadoras? ¿Qué es tiende el Sr. Castelar por pueblo? ¿Desde cuándo y por qué se considera fuera de él a las llamadas clases conservadoras?

¿No podría el Sr. Castelar hacer la distinción clara, precisa y exacta de lo que es pueblo, excluyendo a esas clases, porque le sería imposible, sin faltar a la exactitud, decir cuáles son las clases conservadoras que no pertenecen al pueblo. ¿Entiende el Sr. Castelar que es clase conservadora el conjunto de los que visten gabán en invierno y levita en verano? Pues el noventa y cinco por ciento de los que califican de clases conservadoras pertenecen al pueblo, al verdadero pueblo. El vendedor de comestibles, el ebanista, el sastre, el zapatero, el carpintero, el cerrajer, el maestro de obras, cuantos ganan el sustento con el trabajo manual, visten gabán o levita si los rendimientos de su trabajo les permiten gastar algunos duros más en adquirir aquellas prendas. ¿Son clases conservadoras y no forman parte del pueblo por que no visten chaqueta o blusa?

¿Entiende el Sr. Castelar que pertenece al pueblo todo el que vive de su trabajo? Pues entonces diga quién es el que de un modo u otro no vive de su trabajo, y si el noventa y nueve por ciento de los que visten gabán o levita no viven de su trabajo, a veces más malo y violento y destructor que el trabajo mecánico, diga cuántos son los que en tal concepto no son pueblo. ¿Acaso no lo son los propietarios porque han colocado el fruto de sus ahorros en una casa? Entonces, diga el Sr. Castelar si es pueblo o clase conservadora el considerable número de honrados trabajadores que colocan el fruto de sus economías en la Caja de Ahorros, percibiendo un interés anual, poco más o menos el que percibe el que ha invertido su capital en comprar una finca urbana, que es la que exige menos trabajo por parte de su dueño.

Pueblo es el conjunto de todos los españoles, entre los cuales no hay verdaderas clases, ni estas se conocen en lo legal, en lo político ni en lo social: puede decirse que de todo lo antiguo no ha quedado más que el sacerdote, con su distinción sagrada, pero sin privilegio alguno y perfectamente igual en la sociedad humana a todos los demás. Diga el Sr. Castelar dónde está hoy esa distinción de clases: el duro del mas empolvado albañil vale veinte reales como el del más perfumado y pulcro magnate, y con ese duro puede comprar un asiento de butaca en un teatro, sentándose con su chaqueta o blusa al lado del grande de España o del más rico propietario. El menestral puede ser diputado y ministro como el más opulento banquero: nadie negó la entrada en el Congreso a un diputado

que hace cuatro años se presentó con chaqueta y alpargatas. ¿Dónde están, pues, esas distinciones sociales, esas clases que no son pueblo?

Clase conservadora, si es que ha de existir diferenciándose del pueblo, es el conjunto de los que tienen algo que conservar, desde el más rico propietario de tierras o fincas hasta el menestral que tiene su cama y muebles y las ropas de su mujer y de sus hijos: cuantos trabajan y tienen familia, son conservadores por instinto y por necesidad, y no negará el señor Castelar ni nadie que sean pueblo en la verdadera acepción de la palabra.

¿A qué pueblo, a qué clases ha querido aludir el Sr. Castelar en su nada meditado discurso de ayer? No le inferimos el agravio de suponer que ha querido halagar ciertos instintos, pero sus doctrinas o sus irreflexivas aseveraciones, a eso y no a otra cosa conducen: crear ciertos antagonismos entre el que tiene más y el que tiene menos, es la mas insignificante temeridad que se puede concebir, y no se comprende en quien habla desde el banco de los ministros, que no es la tribuna de un club. Decir que las clases conservadoras y el pueblo de Madrid no deben desconfiar mutuamente, es establecer la distinción y el antagonismo; es decir que existen separadamente y que desconfían: el principio se presta a las más desastrosas consecuencias.

## LA SITUACION

En vano procuráramos hoy apartar la vista del triste espectáculo que ofrecen los partidos revolucionarios para engolfarnos en la serena y fecunda controversia de los principios, que tanto importa esclarecer y determinar, a fin de que no se extravíe la opinión y de que la verdad no sea suplantada por el error en el ánimo inconsciente de las muchedumbres.

Las pasiones del momento, hoy mas que nunca incandescentes, el vértigo de que están poseídas las banderas dominantes, y la ansiedad profunda que embarga el ánimo de todas las familias honradas, de todos los ciudadanos pacíficos y de todas las clases productoras, sobresaltadas por lo presente, temerosas del porvenir y ávidas de conocer la marcha de los acontecimientos que se suceden con vertiginosa rapidez, nos obligan, a pesar nuestro, a aplazar o suspender toda discusión sobre cuestiones doctrinales para desempeñar la triste misión de cronistas de los conflictos y turbulencias demagógicas que determinan los fastos de la revolución por el cúmulo de desventuras que han traído sobre esta patria infortunada.

Hace quince días fué proclamada la república por unos Cortes que carecen de mandato constituyente, y que pretenden imponer al país su voluntad, del mismo modo y por igual procedimiento que las que eligieron al rey extranjero contra el voto unánime de la Nación. Nos encontramos ya en la tercera crisis, cuando apenas el Gobierno ha tenido tiempo para constituirse, para enterarse del verdadero estado del país y para prepararse a las eventualidades de la guerra civil, así en la Península como en Ultramar, y a las terribles contingencias de la anarquía que reina en muchas provincias y en las ciudades más populosas.

Difícil es predecir lo que resultará de esta nueva crisis, en la que, no sólo está comprometida la existencia del ministerio homónimo, sino también la de la naciente república, detenida en sus primeros pasos por los mismos que la proclamaron, por despocho o por egoísmo mal entendido, en un momento de lamentable desvarío.

Difícil es ya una avenencia leal y sincera entre los republicanos de la víspera y los del día siguiente, después del rompimiento que ha tenido lugar en estos días y de la derrota sufrida por el Gobierno en las secciones. Hay quien desea la conciliación, pero no hay términos hábiles para establecerla; y aun en la hipótesis de que pudiera realizarse, no puede ser subsistente y duradera.

La mayoría, monarquía hasta el día 11 de Febrero y dueña de la situación y del presupuesto, no quiere disolverse, y el partido republicano exige de ella ese sacrificio como condición indispensable para dar a la república aquel carácter de estabilidad y de confianza, que hoy no puede tener mientras el Gobierno depende de la voluntad o del capricho de los jefes de la mayoría.

El Gobierno se anula y pierde la confianza de su partido, si cede a las exigencias de los radicales, y estos se suicidan, si consienten en la disolución de la Asamblea y la reunión de las Cortes Constituyentes, a las cuales vendrá, sin duda alguna, una mayoría republicana de lo más intransigente y turbulento, dispuesta a llevar los delirios de la revolución hasta sus últimas consecuencias.

No deja de parecer fundada a primera vista la opinión que sirve de pretexto a los radicales para oponerse a la disolución de la Asamblea; porque, en efecto, en el estado de disolución y de anarquía en que han colocado al país, no puede haber verdadera libertad electoral, y habrá de prevalecer en los comicios la voluntad de las turbas y de los sicarios sobre el voto de la Nación. Pero esto es precisamente lo que viene sucediendo desde la revolución de Setiembre y lo que habrá de suceder mientras subsista la revolución y el poder público esté dominado por la demagogia, convertida en legiones armadas, dispuestas a imponerse sobre todos los gobiernos y sobre el pueblo mismo; de manera que si la Asamblea actual hubiera de durar hasta que el país estuviera en condiciones de reposo y de legalidad que permitieran verificar una elección completamente libre, de la que saliera una Asamblea que fuese la verdadera expresión de la voluntad nacional, sería preciso esperar a que desapareciese el Gobierno revo-

lucionario, y a que el Gobierno constituido tuviera el prestigio, la autoridad y la fuerza necesaria para hacerse obedecer, para obligar a todos a cumplir la ley y para proteger la libertad electoral y la seguridad personal de todos los ciudadanos.

Desgraciadamente todos los gobiernos revolucionarios han sido impotentes para hacer cumplir la ley, y más bien que a robustecer y dar prestigio a la autoridad, han contribuido a envilecerla y debilitarla; y no es por cierto el Gobierno republicano el llamado a restablecerla, trabajado como está por una crisis permanente, careciendo del apoyo del ejército, hoy ilusorio por el estado de desmoralización o mas bien de disolución en que se encuentra, y entregado completamente a los elementos intransigentes y demoleedores de su propio partido, que hoy se le imponen y le arrollan en Madrid, que dominan casi exclusivamente en muchas provincias y que acabarán por desbordarse en todo el país.

Un Gobierno que no tiene fuerza propia y que consiente y protege el armamento de los socialistas e internacionalistas en todas las provincias, dejando a merced de estos a los hombres pacíficos, honrados y laboriosos, que componen la inmensa mayoría del país, ni puede mantener el prestigio de la autoridad, ni garantizar el cumplimiento de la ley, ni responder de la conservación del orden público; y sin autoridad, sin respeto a la ley y sin orden no hay Gobierno posible, sino anarquía, desorden, ruina y disolución social, que es a donde nos conducen rápida y ciegamente los partidos revolucionarios.

## INSURRECCION CARLISTA

Poca fortuna ha alcanzado la partida que se formó el domingo en las inmediaciones de Madrid, a juzgar por el parte que ayer se recibió del alcalde de Tarazona. En el se dice que ha sido derrotada en la sierra de Buendia, haciéndole 14 muertos y casi todos los demás prisioneros. Entre estos últimos, parece que está el jefe de la partida D. Lidro Castillo.

Pero fijándonos en los focos principales de la insurrección, diremos que el general Contreras ha salido ya de Barcelona a reunirse con la columna Vega para dar principio a las operaciones. Dicen que va muy animado, pero no sabemos cómo regresará; pues nos parece que como a sus antecesores, le van a proporcionar serios disgustos las facciones. Estas no necesitamos decir que siguen campando por sus respetos en toda la parte de Cataluña, asustando a los voluntarios que encuentran a su paso y cobrando las contribuciones con la regularidad que el Gobierno desearía para sí. Sin embargo, la *Gaceta* ya se permite hablar de Cataluña en el extracto oficial que publicó ayer, donde dice que se dió una batida cogiendo prisioneros a los jefes Aran, de Lérida, y Patero, de Balaguer.

Del general Nouvilas sabemos que era esperado anteayer por el general Paría para hacerle entrega del mando del ejército del Norte. Entretanto las cartas de Bilbao, San Sebastián y Vergara, deploran el poco éxito de las columnas de operaciones, pues los jefes de partidas siguen haciendo su reclutamiento de mozos sin la menor novedad.

La empresa del ferro-carril del Norte se encuentra en una situación bien apurada, y hasta se dice que se muestra dispuesta a suspender el servicio de la línea en vista de los perances de que es víctima.

En la provincia de Orense, según parte recibido ayer, se han presentado bastantes grupos de carlistas, y se han tomado las precauciones necesarias para dispersarlos, así como para evitar que se presenten otros nuevos.

También las autoridades militares de Galicia han tomado toda clase de medidas para desbaratar los planes de los carlistas y batir a los que se presenten, lo cual indica que se temen nuevos levantamientos que respondan a la agitación que se viene observando por aquella parte.

En las inmediaciones de Cuevas de San Marcos, pueblo de la provincia de Málaga, ha aparecido una partida carlista al mando de una persona muy conocida en Antequera. Parece que su número asciende a unos 300.

En la provincia de Granada la insurrección también sigue creciendo. Según *La Lealtad*, en Aguilar se ha levantado una partida, ignorándose el número de hombres que la forman. Asimismo se dice que en el inmediato pueblo del Salar se ha presentado otra con igual bandera, y que por la parte de Baza se notaban síntomas sospechosos.

Con referencia a un telegrama recibido en aquella ciudad, dice el mismo colega que las tropas habían tenido un encuentro con la partida que vaga en las cercanías de Lija; y como en aquel documento no se daban otros pormenores, creían algunos adivinar que el resultado fué poco favorable a las fuerzas del ejército, a cuya versión se añadía que el jefe de estas había pedido refuerzos a Granada.

En Guadalajara y Toledo parece que se han levantado nuevas partidas, con lo cual se va generalizando el movimiento.

En la votación verificada anteayer en las secciones tomaron parte 293 representantes, obteniendo los radicales, adversarios firmes del proyecto de disolución, 186 votos; los candidatos republicanos 56, que con 39 obtenidos por los radicales conciliadores, Sres. Primo de Rivera y Canalejas, suman 95 sufragios ministeriales, o casi ministeriales. Hubo además 17 papeletas en blanco. Tienen, pues, los radicales una fuerza numérica que representa próximamente el 75 por 100 de las que anteayer se desarrollaron.

Madrid.—Administración y Redacción del periódico, calle de la Visitación, 8, 2.º

Extranjero.—París, para suscripciones y anuncios, C. A. Saavedra, rue Fubert, 51.—París, para suscripciones también, librería de E. Denne Schin, rue Favart 2.

Londres, para anuncios y suscripciones, C. A. Saavedra, 1, Cecil Street Strand.

En Madrid la suscripción se abonará en efectivo. Las de provincias del propio modo, o por libranzas del Giro mudo, o sellos de correos, y también por letras de exacta realización a favor de la Administración de esta última manera ó bien haciendo el abono en efectivo, se servirán las suscripciones en Ultramar.

El importe de las suscripciones que se envíen por cualquiera clase de giro, se solicita que sea en carta certificada.

Anteayer recibió el ministro de la Guerra a los oficiales de la guarnición de Madrid, recomendándoles nuevamente el mantenimiento de la disciplina a todo trance: los jefes de la guarnición dieron al general Acosta toda clase de seguridades sobre el buen espíritu de las fuerzas de su mando.

Como no todos los días recibe el ministro de la Guerra a los oficiales de la guarnición, supone un colega que la conferencia tuviera alguna relación con el temor de que pudiera alterarse el orden.

Un periódico pinta del modo siguiente lo que está sucediendo en Madrid estos días:

«El Madrid político, dice un colega notando que siempre que hay alarmas sucede lo propio, está atacado de intermitentes: hasta las dos de la tarde está tranquilo; pero en cuanto se abre la sesión de la Asamblea todo se le vuelve hablar de una batalla que va a darse: ciertas unas veces, y otras no, da recelo las tropas que rodean el Congreso, y hasta que la sesión se levanta hay agitación. Dan las seis, y la agitación decrece sensiblemente, sobre todo las noches en que no hay reunión de la mayoría; se llenan los cafés, y por terribles que sean las noticias nada parece capaz de producir impresión si la Asamblea está cerrada. Y llega el día siguiente, y vuelta a los temores del anterior, precisamente en las mismas horas.»

Congresos ha habido en España, Cámaras ordinarias y constituyentes; momentos de peligro ha atravesado la sociedad española, y sin embargo nunca han inspirado tanto temor unas Cortes, jamás ha durado el peligro tantos días ni se ha manifestado con síntomas tan extraños.»

La Junta republicana federal de la provincia de Madrid ha dirigido una circular a los presidentes de distrito, dándoles cuenta de la constitución de la misma y elección de la mesa interior.

Merece ser conocido el siguiente párrafo de ese documento:

«A vuestra clara inteligencia no se ocultará que si fuera de la república, hoy trahida sin descanso a la reacción para restaurar para siempre desacreditadas monarquías constitucionales, y el absolutismo peles forzosamente por alcanzar el triunfo de su odioso sistema, dentro de la república hay también enemigos, declarados unos, encubiertos otros, de nuestro principio federativo, de nuestra doctrina democrática; en una palabra, de nuestro ideal de justicia y de libertad. A que este se realice propia y definitivamente tienen los esfuerzos de la junta provincial de Madrid. ¿Pelez ella si en empresa tan árdua como es la del saneamiento moral, político y social de la república española, logra hacerse digna de la consideración pública y de la estimación de sus correligionarios.»

Uno de nuestros colegas da a conocer las condiciones que los radicales querían imponer al Gobierno para aceptar el proyecto de disolución de la Asamblea. Hé aquí cómo las expresa:

«Los radicales imponían dos condiciones para aceptar el proyecto de disolución. Es la una económica: una comisión permanente, que, erigida en poder supremo del Estado, resolviera todas las cuestiones que puedan surgir por árduas y difíciles que sean. Y es la otra la exigencia del apoyo gubernamental de doscientos candidatos para las futuras Cortes, a fin de conservar en los destinos a todos los radicales que hoy figuran en nómina. Estas condiciones han sido rechazadas por el poder ejecutivo, con una dignidad que honra a los hombres que le constituyen.»

Dícese que los sucesos de España han influido no poco en el acontecimiento ocurrido en Francia, de que ayer hablamos, y que la alarma esparcida en toda Europa justifica la siguiente frase, atribuida a un hombre de Estado español: «La república española crea la monarquía francesa.»

Nuestro apreciable colega *La Epoca* dijo anteayer lo siguiente:

«El cambio tan importante ocurrido en España ha alterado naturalmente la situación de todos los partidos en nuestro país y la posición de sus más altos representantes. Un principio extranjero ha descendido del trono y la república se ha proclamado en España. En esta situación, el duque de Montpensier, obrando con una gran delicadeza, ha creído deber abdicar la dirección moral de los intereses cuya representación había tomado después de lo que tan inapropiamente se llamó el pacto de Cannes. Asente de nuestro país, viendo que su personalidad podía ser causa de pretexto para algunos de dificultades en la obra salvadora de agrupar todos los elementos conservadores y liberales, ha insistido en que otros personas tomaran a su cargo una misión que él desempeñando con gran lealtad y en interés, no de su ambición personal, sino de la patria.»

*La Igualdad* publica la siguiente comunicación pasada por un alcalde de Madrid a uno de los alcaldes de barrio con motivo del armamento de los vecinos honrados:

«En vista de la atenta comunicación de Vd., fecha del 27 del actual, he dispuesto autorizar a los vecinos de ese barrio para que se organicen y armen por su cuenta con objeto de defender el orden público, la propiedad y la familia, debiendo hacerlo a las órdenes de su autoridad y auxiliarla en caso necesario, usando un lazo blanco y sin formar agrupaciones en las calles y plazas.»

Lo digo a Vd. con devolución de la lista original que acompaña, encargándole remitir una copia de la misma para los electos procedentes.

Dios guarde a Vd. muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1873.—El alcalde interino, Ignacio Santiago y Sanchez.»

A *La Igualdad* le parece realista y legítima el lazo blanco, y trata con escasa benevolencia al Ayuntamiento de Madrid. *La Política* dice que el Sr. Avalos, cansado de insistir en su dimisión, ha tomado las de Villadiego, es decir, ha empezado a hacer uso de la licencia que tenía concedida.

Como la cuestión del día es la pendiente entre radicales y republicanos, a continuación vamos a reproducir lo que acerca de ella dicen los periódicos mejor informados.



## El Diario Español dice lo siguiente:

Las conferencias y para parte entre la Junta directiva de los radicales y el Gobierno, han continuado todo el día de hoy, aunque hasta ahora no han dado resultado satisfactorio.

El Sr. Rivero capitaneó el grupo llamado de los benévolo; estos desean un Gabinete en que sea jefe en reemplazo del Sr. Figueras, aunque todos los demás ministros sean republicanos.

Asegúrese que la fracción de Martos desea un ministerio mixto, dándose la cartera de Gobernación al Sr. Becerra, como garantía para obtener doscientos distritos en las próximas elecciones de Constituyentes.

Dícese también que se ha pedido la creación de cuatro ministerios sin cartera para otros tantos radicales.

—A última hora se ha dicho en el salón de conferencias que al fin habría avenencia entre los radicales y el Gobierno, bajo la base de modificar el proyecto de ley de suspensión en la parte relativa a la época en que se habrán de verificar las elecciones para las Cortes Constituyentes.

## En la Época se lee lo siguiente:

Los trabajos de conciliación entre radicales y republicanos continúan, y el tiempo que se pierde prueba la dificultad de hallar una fórmula aceptable. No sería difícil, empero, procediendo con sincero espíritu de buena fe, y no tenemos inconveniente en valorar, que siendo el arreglo una necesidad de las circunstancias, ya se descubrirá la manera de realizarlo. Por supuesto, los procedimientos hasta ahora anunciados eran absurdos: se hablaba de ministros adjuntos, especie de magayres vigilantes durante el período electoral; se hablaba de un Directorio de conciliación y de otros proyectos aún más probables. No sabemos si esta noche se vendrá a un acuerdo, porque a todos interesa romper de una vez ó entenderse pronto para contener la anarquía que avanza.

## El Tiempo se limita a estas líneas:

La importante discusión de esta tarde retrasó los efectos de las juntas celebradas.

—Parece que sólo hay cierta disposición a entenderse, lo cual es algo, aunque no mucho.

Los rumores son de efecto: se habla de un Directorio, en el que estarían juntos los Sres. Rivero y Figueras.

La cuestión, como puede verse, está aplazada. Las dificultades son graves por una y otra parte, y cuantos tengan alguna sonseza, no pueden querer extremar las cosas. Así es que el mismo *Pueblo* dice que "el federalismo en España significa, ante todo, la ruptura de la unidad nacional, y tan sólo esta circunstancia es más que suficiente para que todo el que tenga algo de español rechace con energía un peligro tan grande para la existencia de la Nación española."

Ante los temores de desórdenes que anteayer cundían, no ha faltado quien se hiciera eco del rumor á que se refiere *La Iberia*, anunciando que la Asamblea se trasladaría a un pueblo de la provincia de Madrid, caso de que la alarma continuara.

Se ha hablado en efecto de Aranjuez, que sería nuestro Versailles; pero no creemos en este rumor absurdo.

No son muy tranquilizadoras las declaraciones que hace ayer *La España Federal*, y que á continuación transcribimos, no obstante que al terminar su primer artículo de fondo nos presenta al poder ejecutivo en reunión con la Junta directiva del partido radical, á la que asisten el presidente de la Asamblea, el señor Rivero y otras personas importantes, y da como casi segura una conciliación.

Dice así nuestro colega:

—La Junta directiva del partido radical estuvo reunida anoche durante dos horas, á la que por cierto no asistió el Sr. Rivero.

Según las noticias que pudimos adquirir, el espíritu que reinó fue algo tan intrínseco, resolviendo en principio sostener el acuerdo de anteayer.

Las palabras conciliación y consecuencia se oían anoche en todos los círculos; pero téngase en cuenta que estas cosas parten de los radicales, porque la verdad es que nuestros amigos observan una conducta digna y levantada en esta cuestión.

También se decía que el Sr. Rivero deseaba llegar á una avenencia por medio de un ministerio mixto.

En todo esto lo que se descubre es que los radicales quieren hacer suya la situación; pero á falta de prestigio moral y de fuerzas materiales, no se atreven a presentar de frente la batalla, porque tienen la conciencia de que han de perder en su pretensión.

En una palabra, los radicales adictos á Martos quieren llevar adelante su temeraria empresa, y los amigos del Sr. Rivero, observando igual conducta que en los días siguientes á la revolución de Setiembre, comprenden el conflicto, y á fin de no perder terreno, sueñan en uniones nefandas.

Este es el estado de la cuestión de disolución al escribir nuestras líneas.

Por nuestra parte, inspirándonos en los sentimientos de los federales y en la razón, debemos declarar muy alto que el partido republicano federal no puede consentir ni mistificaciones, ni combinaciones que darian por resultado una república imposible; tengámoslo muy presente los radicales; con la palabra, con la pluma, con los brazos en último caso, llevaremos á cabo el planteamiento de la república en forma de toda su pureza.

Animada del mismo espíritu, *La Igualdad* se expresa en estos términos:

—Pero si, contra lo que creíamos, tan osados fueran los intrigantes que se atrevieran al extremo de la final batalla, ya lo hemos dicho, dispuestos estamos á renir con la seguridad del triunfo, porque sobradamente razón no ha de faltarnos la energía.

Pronto, muy pronto, quizás hoy mismo se vean claras sus intenciones. Si lo que está sucediendo es una farsa de teatro la terminaremos con una carcajada. Si es una locura funesta, importa no perder el tiempo en vacilaciones, que, como el refrán aconseja, «el que da primero, da dos veces».

La advertencia no es para desechada. Sin embargo, todavía podrá suceder que unos y otros lo piensen mejor, y ahorrén a la patria días de luto.

Según cartas de Barcelona parece que al proclamarse la república en aquella capital, el general Gamín de recibió la siguiente comunicación:

«Ejército real.—General: Ni Vd. ni yo somos republicanos. Reprimá Vd. en Barcelona los excesos de la demagogia, que desde Cádiz á la frontera responde del orden, *Subaltes*».

No sabemos si llegará ayer noche el tren del Norte que, según nos dijeron por la mañana, traía un gran retraso por haber sido cortada la vía férrea y la telegráfica é incendiada la estación de Brives a.

Lo que sí podemos asegurar es que no recibimos periódicos ni correspondencias del Norte ni del extranjero.

A pesar de que los periódicos portugueses de oposición y repalan rumores de trabajos en favor de la princesa doña Antonia, enlazada con la familia real prusiana, tanto los diarios más sensatos del vecino reino, como numerosas correspondencias de Lisboa y otros puntos importantes, están conformes en que no existe el menor fundamento para semejantes rumores, y en que los recientes sucesos de España han estre-

chado los lazos que unen al pueblo portugués con la dinastía de doña María de la Gloria.

## PRESUPUESTOS

## PRESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

DE LA REPÚBLICA.

LEY.

La Asamblea nacional, en uso de su soberanía, decreta y sanciona la siguiente ley:

Artículo 1.º Los gastos del Estado durante el año económico de 1872 á 1873 se fijan en 501,950,971 pesetas y 40 céntimos, distribuidos por capítulos y artículos según el estado letra A.

Art. 2.º Queda derogado el art. 5.º de la ley de 27 de Julio de 1871 en la parte que se refiere á la forma en que hayan de satisfacerse á las compañías de ferro-carriles en construcción las cantidades que les correspondan por subvenciones, auxilios ó anticipos.

Estas cantidades se satisfarán en la forma que establecen las leyes respectivas, y cuando no se determine expresamente lo contrario, en obligaciones del Estado por ferro-carriles, precio de cotización.

Art. 3.º El período del presupuesto de 1872 á 1873, la Deuda flotante del Tesoro no podrá exceder del importe de los descubiertos de este por los presupuestos anteriores y lo que exija en el corriente el servicio de la Tesorería. El importe de esta Deuda que se calcula en la cantidad de 300 millones de pesetas, una vez hechas las negociaciones del empréstito de 1,000 millones en 3 por 100 consolidado y 600 en billetes hipotecarios del Tesoro, estará representado por medio de billetes, giros, pagarés y préstamos, según convenga á los intereses públicos.

Art. 4.º El importe total de los bonos del Tesoro, que en fin del año económico resulte haberse admitido en pago de bienes nacionales y redenciones de censos, se imputará al crédito consignado en el artículo 18 de la sección 3.ª del presupuesto de obligaciones generales del Estado para amortización de los expresados valores. En el caso de que el importe de los bonos admitidos no alcance á cubrir dicha suma, se amortizarán por sorteo los bonos necesarios para completarla.

El Gobierno publicará una instrucción especial para cumplir este artículo, determinando que los bonos que no estén en circulación, y sólo disfrutaran por tanto amortización directa, tengan designada la parte proporcional que de esta les corresponda.

Art. 5.º Se aprueban las adjuntas bases:

Letra L. Para reformar la organización y servicio de los resguardos.

Letra M. Para la creación de valores con objeto de continuar las obras públicas.

Art. 6.º Los haberes que á virtud del dictamen de la comisión de las Cortes Constituyentes, fecha 14 de Junio de 1870, puestos en vigor por la Real orden de 14 de Enero de 1871, ha declarado y continúa declarando el tribunal de primera instancia de clases pasivas, por razón de servicios prestados á la Casa Real, y que se han satisfecho como anticipaciones á la misma, de cuya dotación se dedujeron en parte, serán reintegrados y formalizados con cargo á la sección 5.ª del presupuesto de obligaciones generales del Estado. Con la misma aplicación continuarán satisfaciéndose los haberes de las expresadas clases, ínterin una ley general no determine otra cosa.

Art. 7.º Se formalizará en cuentas, con cargo á capítulos adicionales de las respectivas secciones del presupuesto de gastos, el importe de los créditos á favor del Tesoro por pagos en suspenso, anticipaciones ó entregas á justificar hechas á los respectivos ministerios y á la Casa Real hasta fin de Junio de 1871, siempre que resulten por gastos definitivos debidamente justificados y que carezcan de crédito legislativo al liquidarse los presupuestos correspondientes, los créditos con cargo á los cuales se hubieran librado.

Los pagos que por el mismo concepto se hayan verificado durante el año económico de 1871 á 1872 se formalizarán en los propios términos dentro de los tres meses siguientes á la conclusión del período de ampliación del expresado ejercicio.

Art. 8.º Quedan prohibidos los pagos en suspenso de los diferentes ministerios. Las cantidades que deban satisfacerse para la ejecución de servicios cuyos impuestos no puedan obtenerse al tiempo de hacer los pagos, se aplicarán desde luego á los capítulos correspondientes, quedando los jefes encargados de los mismos servicios responsables de la justificación que habrán de entregar á las intervenciones de las ordenaciones respectivas en el improrrogable plazo de tres meses.

Art. 9.º Se confirman las disposiciones vigentes para el ingreso y ascenso de los empleados en el ramo de aduanas.

El Gobierno presentará una ley de empleados general y especial de Hacienda.

Se declaran sin efecto las leyes, disposiciones y reglamentos que establecen la inamovilidad del cuerpo de contabilidad y tesorería.

Art. 10. Hasta que se apruebe una ley general de clases pasivas, serán estrictamente cumplidas las disposiciones del decreto-ley de 22 de Octubre de 1868, á contar desde la fecha del mismo; pero sin que en ningún caso puedan tener en su aplicación efecto retroactivo con respecto á los servicios prestados en leyes anteriores y á los abonos de servicios por nombramiento de autoridad competente delegada en empleos de planta consignados en los presupuestos del Estado.

Art. 11. En el plazo de tres meses, contados desde la promulgación de esta ley, resolverá y terminará necesariamente la Junta de la Deuda pública los expedientes de liquidación y entrega de los créditos de la del personal, aplicando con todo rigor el art. 13 de la ley de 10 de Julio de 1869 de modo que queden definitivamente reconocidos ó caducados los valores respectivos.

Los motivos de caducidad para los expedientes en tramitación dentro de dichos tres meses, serán los ordinarios de la ley; es decir, la falta de pruebas y el no desvanecer cumplidamente los reparos que se hicieran á las presentadas; y para los créditos ya liquidados será también motivo de caducidad la falta de personalidad legítima que los recobre en el plazo de un año desde la publicación de la ley.

Art. 12. De los 12 millones de reales consignados por el art. 4.º de la ley de 31 de Julio de 1855 para amortización de la Deuda del personal, se descontarán 500,000 pesetas en razón á la parte de dicha Deuda que hoy se halle ó pueda hallarse liquidada y no salga á circulación por falta de personalidad de quien la reclame.

Art. 13. Se deroga el art. 32 de la ley de contabilidad de 25 de Junio de 1870; debiendo, con arreglo al art. 100 de la Constitución, cobrarse é invertirse las contribuciones y rentas públicas en virtud de las leyes de presupuestos ó autorizaciones de las Cortes votadas en cada una de las legislaturas.

Art. 14. Se deroga igualmente la facultad concedida al Gobierno por el art. 41 de dicha ley para la concesión de suplementos de crédito con aplicación á artículos y servicios comprendidos en el presupuesto del Estado, debiendo previamente pedirse á las Cortes los correspondientes créditos.

Subsistirá la facultad de abrir créditos extraordinarios para aquellos servicios no previstos en los presupuestos, según las formalidades establecidas en la expresada ley.

Art. 15. Las disposiciones comprendidas en las diferentes secciones del estado letra A forman parte integrante de esta ley.

Lo tendrá entendido el poder ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento.

Palacio de la Asamblea nacional veintiocho de Febrero de mil ochocientos setenta y tres.—Cristino Martos, presidente.—Cayo Lopez, representante secretario.—Eduardo Benot, representante secretario.—Federico Balart, representante secretario.

Sigue á este presupuesto el estado letra A, en que aparecen las obligaciones generales del Estado, que son 7,500,000 pesetas para la extinguida Casa Real; 1,020,451 para los Cuerpos Colegiados; 238,340,704 por intereses y amortización de la Deuda, deducida la tercera parte que se paga en papel; 3,390, 60 por cargas de justicia, y 40 ó 0,346 que importan los haberes de las clases pasivas. El total de la sección de obligaciones generales del Estado asciende á 290,861,688 pesetas.

Las obligaciones de los departamentos ministeriales importan 301,939,303 pesetas distribuidas en esta forma:

Sección 1.ª—Presidencia del Consejo de Ministros.....	600,917
—2.ª—Ministerio de Estado.....	2,890,900
—3.ª—Idem de Gracia y Justicia.....	13,963,513-98
—4.ª—Idem de la Guerra.....	104,266,914
—5.ª—Idem de Marina.....	20,470,583-27
—6.ª—Idem de la Gobernación.....	23,048,933-85
—7.ª—Idem de Fomento.....	29,898,269-99
—8.ª—Idem de Hacienda.....	105,949,271-66
Total.....	301,089,303

De los gastos del ministerio de Gracia y Justicia corresponden 10,708,158 pesetas al personal y material de los tribunales y 3,225,355 á obligaciones eclesiásticas.

Los del ministerio de la Guerra se distribuyen del modo siguiente:

Servicio general, 88,210,738; Guardia civil, 15,009,772; cumplidos del ejército, 14,000. Ejercicios cerrados, 1,032,864.	
El servicio general del ministerio de la Gobernación importa 22,609,635, los ejercicios cerrados 355,070 y los gastos de los ramos reproductivos 24,227.	
El resumen de las obligaciones del ministerio de Fomento es el siguiente:	
Servicio general.....	1,256,650
Agricultura, industria y comercio.....	3,213,569
Instrucción pública.....	5,579,059-25
Obras públicas.....	14,967,083
Estadística.....	1,513,000
Gastos productivos.....	23,000
Ejercicios cerrados.....	3,315,314-74
Total.....	29,898,269-99

Se autoriza al Gobierno para que eleve al 5 el por 100 de amortización de las obligaciones para obras públicas que se crean por el apéndice letra M de este presupuesto; entendiéndose ampliado en la cantidad necesaria el crédito consignado á este servicio.

El Gobierno satisfará á las compañías de ferro-carriles en construcción las subvenciones, auxilios ó anticipos que les correspondan en títulos de la Deuda consolidada la ínterin hasta tanto que tenga en su poder títulos definitivos de obligaciones de ferro-carriles para cubrir á este servicio.

Los gastos del departamento de Hacienda corresponden á las obligaciones que se expresan á continuación:

Gastos de la administración central.....	4,694,700
Idem de la administración provincial.....	7,910,732
Idem de la administración central y provincial.....	3,728,572
Idem de fabricación, explotación, transportes, expendición y demás gastos de las rentas y propiedades del Estado.....	42,210,376
Resguardos.....	14,190,113-60
Minoración de ingresos.....	31,893,883-73
Ejercicios cerrados.....	1,005,730-20
Indemnizaciones.....	315,184-13
Total.....	100,949,271-66

Forman parte integrante del presupuesto de gastos los siguientes apéndices que también publica la *Gaceta*, y que creemos conveniente reproducir, considerándolos de interés:

APÉNDICE LETRA L.  
Bases respecto de la organización y servicios de los resguardos.

1.º El cuerpo de carabineros y el correspondiente al servicio de buques guardacostas continuarán dependiendo respectivamente de los ministerios de la Guerra y de Marina en cuanto á su organización y disciplina, y del de Hacienda en todo lo relativo al objeto del servicio especial de su instituto.

2.º Uno y otro cuerpo continuarán, por tanto, ejerciendo la vigilancia y represión del fraude y contrabando en las costas y fronteras, y en las zonas terrestres y marítimas bajo la dirección del ministerio de Hacienda.

3.º No se concederán ascensos á los individuos de ambos resguardos sino á virtud de propuesta de dicho ministerio de Hacienda.

4.º En los casos en que este lo estime conveniente ó necesario, propondrá á los de la Guerra y de Marina la traslación, suspensión ó separación de cualquier individuo de los expresados resguardos, las cuales serán acordadas desde luego por el ministerio de Hacienda de quien dependa el interesado.

5.º Los individuos de ambos resguardos separados del servicio por causa probada, serán baja definitiva en los mismos, y en ningún caso tendrán opción á nuevo ingreso.

6.º Las fuerzas destinadas á resguardos terrestre y marítimo no podrán, bajo ningún pretexto, ser distraídas del servicio especial que les está encomendado fuera de los casos siguientes:

Primero. Cuando la Nación se halle en estado de guerra.

Segundo. Cuando se altere el orden público en la provincia ó localidad donde preste su servicio, y sea de absoluta necesidad su cooperación para restablecerlo.

En ambos casos la fuerza reconcentrada quedará á las inmediatas órdenes de la autoridad de distrito, provincia ó departamento, las cuales darán cuenta oportunamente al ministerio de Hacienda del empleo que hayan dado á las expresadas fuerzas.

Tan luego como las circunstancias no exijan de un modo absoluto que continúen reconcentradas las fuerzas de uno y otro resguardo, se dispondrá por quien corresponda su inmediato regreso á los respectivos puntos de su procedencia.

7.º Todas las autoridades del territorio prestarán el más eficaz auxilio á los individuos de ambos resguardos cuando se lo reclamen en el ejercicio de su especial cometido.

8.º El ministerio de Hacienda, de acuerdo con los de la Guerra y Marina, procederá á formar y expedir un reglamento que determine la organización de los resguardos de mar y tierra; el orden y pormenores con que han de cumplir el servicio de su instituto; la dependencia y deberes de los mismos con relación á los delegados del primero de dichos ministerios en la administración provincial, y los premios que hayan de otorgarse á los individuos que más se distinguen en el cumplimiento del servicio que tienen á su cargo.

9.º El ministerio de Hacienda ó la dirección general de Aduanas podrán destinar el número de empleados que crean oportuno á la persecución del contrabando, á los cuales se prestará por las autoridades de todas clases el auxilio que reclamen para mejor cumplir su cometido.

Palacio de la Asamblea Nacional 28 de Febrero de 1873.—Cayo Lopez, representante secretario.—Eduardo Benot, representante secretario.

APÉNDICE LETRA M.  
Bases para la creación de valores con el objeto de continuar las obras públicas.

1.º Se autoriza al ministro de Hacienda para emitir acciones de obras públicas de 500 pesetas cada una, con un 6 por 100 de interés y 1 por 100 de amortización. Los intereses se abonarán por semestres vencidos de 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.

La amortización se hará por sorteo en fin de cada año económico.

2.º El producto de la emisión se destina al pago de obras en curso de ejecución, de las que en adelante hayan de construirse en virtud de esta ley, y de los demás servicios que se ejecuten por contrata, y de los trabajos del Instituto geográfico, según se detallan aquellas y estos en el presupuesto de Fomento.

3.º El ministro de Hacienda comprenderá en el presupuesto de la Deuda pública los créditos necesarios para los intereses y amortización de acciones de obras públicas creadas por el art. 1.º, destinándose siempre para ambos conceptos el 7 por 100 del valor de las obligaciones emitidas.

4.º El pago de las obras públicas que en virtud de esta ley se contratan, y el de las ya contratadas, cuando lo soliciten los interesados, se hará en obligaciones al precio medio de cotización del mes en que deben hacerse los pagos.

5.º Ínterin las obligaciones creadas por esta ley no se coticen, servirá de tipo para su entrega á los contratistas que lo soliciten, el precio medio de la cotización de las acciones emitidas en 1.º de Julio de 1868, con arreglo á la ley de 26 de Marzo del mismo año.

6.º Para los pagos que por los antiguos contratistas se exigieran en metálico y para el de aquellos servicios que por sus condiciones especiales daban lugar a dicho pago, el ministro de Hacienda emitirá en pública licitación el número de obligaciones necesarias, cuyo producto íntegro se destinará á los servicios que el art. 2.º expresa.

Palacio de la Asamblea Nacional veintiocho de Febrero de mil ochocientos setenta y tres.—Cayo Lopez, representante secretario.—Eduardo Benot, representante secretario.

## SITUACION DEL BANCO DE ESPAÑA

Hemos recibido un ejemplar de la Memoria que ha publicado la Junta de gobierno del Banco de España, referente á la situación financiera del establecimiento y operaciones de crédito practicadas por el mismo en el año anterior.

Según la expresada Memoria, el movimiento de cuentas corrientes fué en dicho año de escudos 922,649,879,030.

Los depósitos alcanzaron la cifra de escudos 56,064,149,374.

La circulación en billetes ha oscilado hasta la suma de 35,035,150.

El movimiento de la caja en efectivo fué por entrada 1,359,801,172,919, y por salida escudos 1,389,246,451,330.

La cantidad que por todos conceptos ha salido del Banco en metálico en el expresado año fué de 80,692,789,101.

El movimiento de la caja de efectos en custodia por entrada 912,885,239,553, y por salida 727,169,101,365.

Los cupones presentados al cobro ascendieron á 732,628.

La transferencia de acciones en dicho año fué 11,18 por venta, y 2,079 por defunción, existiendo en fin de Diciembre 2,321 accionistas.

Los dividendos que han percibido los accionistas ascendieron á 36 escudos, ó sea el 18 por 100.

Los gastos ocurridos en el año se elevaron á 253,954,792 escudos.

Los alcances y robos en el servicio de la recaudación de contribuciones importaron 562,162,491 escudos.

Los beneficios líquidos obtenidos en 1872 se elevaron á la suma de 4,025,614,750 escudos.

Los saldos contra el Tesoro en fin de Diciembre eran de 30,534,872,558 escudos.

En la expresada Memoria se da cuenta de las diligencias practicadas para impedir la falsificación de los billetes, las que no dieron todo el resultado que fuera de apetecer en vista de la frecuencia con que aparecen en la plaza billetes falsos, mejor ó peor confeccionados, pero que han circulado y causado quebrantos de consideración al comercio.

Se desea que nada dice la Memoria de que nos ocupemos respecto á las condiciones con que han realizado operaciones de crédito con el Tesoro y el interés que este ha satisfecho por los préstamos, que han ascendido á la enorme suma ya citada de más de 30 millones de escudos, y atendidas las utilidades obtenidas, mucha parte de ellas se deberán á estas negociaciones.

Celebramos mucho el estado floreciente en que se encuentra el primer establecimiento de crédito de España, y á los accionistas sostengun un interés del 18 y 100 del capital de las acciones; pero quisieramos que no fuese á costa del Tesoro público, según revelan los anticipos hechos al mismo, y que ascienden á una cifra enorme, que demuestra las angustias y apuros de aquel, y que son causa de la crisis financiera que el país atraviesa.

El *Parte Diario* de Alcoy publica una extensa hoja que la Internacional ha circulado con profusión en aquella capital.

En dicho documento se encuentran estos *consoladores* y *tristes* que publicamos sin comentarios, como una muestra de lo que la revolución nos ha traído con sus gloriosas conquistas:

«Creemos que ha sonado la hora para todos los internacionales de hacer un supremo esfuerzo, siendo incansables y activos en la propaganda...»

Si queremos la transformación de la propiedad individual de la tierra y de los grandes instrumentos del trabajo, en propiedad colectiva, la *cooperación* integral y la destrucción de todos los privilegios y monopolios, es preciso estar convencidos que todo lo merecemos, que todo nos lo hemos de conquistar, porque todo es nuestro, y que nada se nos dará si no lo arrancamos de los que injustamente lo poseen.

Es preciso ir adelante hasta el triunfo de la anarquía ó del colectivismo, ó sea la destrucción de todos los poderes autoritarios y de los monopolios de clase, en donde no habrá ni Papas, ni Reyes, ni Burgeses, ni curules, ni militares, ni abogados, ni jueces, ni escribanos, ni políticos, pero sí una libre federación universal de libres asociaciones obreras agrícolas é industriales.»

Dice *El Euzalduna* de Bilbao, y es curioso el hecho que relata:

«Antes de ayer, 2, después de oír misa, se dirigió al cuartel de San Francisco la escasa fuerza del regimiento del Rey que se halla en esta villa y al marchar, los soldados prorrumpieron en *canciones* á la república, y se prolongaron hasta llegar al cuartel; pero no bien entraron, todo quedó en silencio. Un numeroso gentío se había agolpado á la calle y plazaeta del cuartel.»

Según parece, en Girona ha sido desarmado el batallón de voluntarios de aquella capital.

Con este motivo, nuestro colega *La Lucha*, después de dar la noticia, hace sobre ella sentidos comentarios.

Ayer se aseguraba que unos de estos días traería el periódico oficial, el nombramiento del ingeniero jefe de caminos D. Eusebio Page, para el cargo de director general de Obras públicas.

Han sido nombrados secretarios, para el gobierno de Leon, D. Nicolás Ceballos; para Jaén, D. Enrique Balanzategui; para Logroño, D. Francisco J. Gomez; para Palencia, D. Faustino Sancho y Gil; para Lérida, D. Ricardo Canela; D. Francisco de P. Cuchau para Toledo, D. Ramon Lafarga, para Valladolid, D. Ramon Chico y Gomez, para Alicante, y D. Melchor Almagro, para Granada.

Anteayer descarriló el tren expres cerca de Irún, sin que ocurrieran desgracias personales.

Ha fallecido en Madrid el secretario del Banco de España D. José de Adaro y Ruiz.

Ayer salió para Leon el nuevo gobernador de aquella provincia, Sr. Sañudo.

Ha sido nombrado gobernador de Málaga el señor Puente, que es alcalde de Granada en la actualidad.

El brigadier D. José Salcedo ha sido nombrado comandante general de las fuerzas que operan en los distritos de Pamplona y Estella.

La comisión de suspensión de sesiones se reunió ayer á las dos para continuar su trabajo.

SEÑALAMIENTOS PARA HOY.—Caja de Depósitos.—Intereses de depósitos en efectos públicos, segundo semestre de 1872, núm. 89 (se sortea, carpeta números 2,311 al 20 de señalamiento).



manera clara y terminante por el señor presidente del poder ejecutivo; esto me movió a anunciar la interposición. No quiero, pues, dirigir censura alguna al poder ejecutivo, pues conozco los nobles sentimientos y propósitos que animan a todos los individuos que le componen; pero habiéndome, tal vez por el calor de la improvisación, contestado en algunos momentos con palabras insuficientes para inspirar confianza, esto podría llevar a la alarma a las distintas clases sociales y romper la unidad que tan necesaria es, porque no es la manera de conservarla al hacer distinciones y clasificaciones arbitrarias.

Yo no vengo a hablar en nombre de las clases conservadoras ni populares, porque establecida la república, entre nosotros no ha de haber distinción de clases, ni hay nada que autorice a hacer entre los ciudadanos españoles otras agrupaciones que aquellas que dependan de su propia iniciativa. De suerte que yo no vengo aquí a hacer un acto de oposición, sino que vengo, en uso de mi derecho, a intervenir en los actos del poder ejecutivo, a pedirle explicaciones que no habrá de negarse a dar, en nombre, no de ninguna clase social, sino de grandes intereses que así importan al partido republicano como a todos los partidos. Dejemos, pues, estos a un lado, pues si bien representan más especialmente unos intereses u otros, esas distinciones de partido, que en el orden político son necesarias, desaparecen, y de ellas debemos prescindir cuando se trata de altos intereses sociales.

Aquí no hay clases, no hay pueblo ni democracia; no hay más que la Nación española; y si en este sentido usas de la palabra pueblo, todos, aunque con distinto procedimiento, estamos inspirados por los más levantados propósitos. Yo creo que este país, por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus antecedentes y hasta por su legislación, es el más democrático de la tierra; y de esperar es que en cuestiones de esta clase no vengamos los partidos a mezclar sus pequeños intereses en cuestiones de tanta importancia. No hay, pues, aquí más que un grande interés que a todos importa; y voy ahora a la cuestión concreta.

Lo que parece que ha alarmado a algunos, es que los vecinos de Madrid, sin aspirar a una organización militar, y por tanto sin dar derecho a nadie que intervenga en su organización, en uso de un derecho que nadie puede negarles, se han asociado para fines lícitos y honestos.

Es verdad que hay una ley de organización de las fuerzas populares, y que todas las fuerzas de esta clase que pretendan organizarse han de atenerse a las prescripciones de esa ley; pero es también verdad que esa ley no establece preceptos obligatorios, y que aquellos que no quieren organizarse en esa forma, pueden dejar de hacerlo. Yo no encuentro yo razón alguna para que nadie pueda oponerse a que, en uso de su derecho individual, se agrupen los ciudadanos para defenderse, y que, en consecuencia, se pueda entenderse con los demás ciudadanos que la parezca oportuno y asociarse para guardar en determinados casos y defender sus hogares, su familia y su propiedad, que son los fines que se proponen en esas reuniones de vecinos. Este derecho creo que no podrá ser negado por nadie, y sería hacer un agravio al Sr. Castelar suponer, siquiera por un momento, que podía desconocerlo. No nos queda, pues, más que la cuestión de forma, y vamos a examinarla.

Se han reunido los vecinos en sus respectivos barrios; ¿han cometido algún delito al reunirse? No. La Constitución les autoriza a reunirse y a asociarse para todos los fines de la vida que no se opongan a la moral y al derecho. Una vez reunidos, han tratado de la organización que sería más conveniente para la defensa de sus hogares, y han creído que cumplía a su propósito ponerse de acuerdo, guardando cada uno su casa y teniendo su arma dispuesta para emplearla, caso necesario. ¿Hay en esto algo que se oponga al derecho constituyente ni al constituido? ¿Hay algo, que dada la opinión del armamento nacional, hoy en boga, no se encuentre dentro de un derecho legítimo y perfecto? ¿Hay por parte del Gobierno algún medio eficaz para impedirlo dentro de la ley? Y ahora, ¿qué ha dispuesto el Gobierno a respetar el artículo constitucional que establece y consagra la inviolabilidad del domicilio?

Pues si el Gobierno está dispuesto a respetar ese artículo, como no puede menos de hacerlo, y a respetar igualmente el derecho que los ciudadanos tienen de reunirse y asociarse para todos los fines de la vida que no se opongan a la moral, la asociación de esos vecinos para su legítima defensa, en un caso necesario, es legítima, y no puede ser objeto de censura ni de medida alguna por parte del Gobierno.

El derecho de la defensa legítima no es necesario que se consigne en ninguna Constitución, porque está escrito en el corazón humano. El derecho individual de asociarse y reunirse para todos los fines de la vida que no se hallen en oposición con ninguna de las prescripciones morales, está consagrado en la Constitución.

Y, precisamente, los fines para los que los vecinos se han reunido en sus barrios se hallan dentro de lo preceptuado en el artículo constitucional; y no siendo posible que atente a la inviolabilidad del domicilio; y estando, en una palabra, los vecinos en su perfecto derecho para obrar de la manera que han obrado, sin atentar ni a la autoridad del Gobierno ni a la de la Asamblea, ni a ninguna ley, entiendo que no hay razón, motivo ni fundamento legal para que nadie pueda oponerse a esas reuniones ni a exigir del Gobierno una declaración que podía llevar la alarma al ánimo del vecindario. Así, pues, yo espero que el Sr. Castelar se sirva dar a esto una contestación satisfactoria y explícita que no deje lugar a duda alguna.

Debo ocuparme ahora de algo de que importa que yo me ocupe, y es de cierta pretendida ofensa que en esta organización de los vecinos de Madrid se ha creído ver, dirigida a la Milicia ciudadana; y he aquí por qué he pedido yo la palabra, pues nada que a mí me mis labios puede ser interpretado por esa fuerza benemérita, de que he tenido la honra de ser jefe, y soy actualmente compañero.

No se ha ofendido para nada a la Milicia de Madrid; estoy autorizado para decirlo y dispuesto a desmentir al que otra cosa crea. (El Sr. Carmona pide la palabra). Yo, que en los momentos de vacilación y peligro, y cuando muchos discutían si debían o no entregarse las armas de la Milicia he sostenido su espíritu, me he sobrepujado a otras opiniones y la he mantenido organizada, no puedo ser adversario de la Milicia. Soy su amigo, y todos sus individuos saben que el antiguo alcalde de Madrid está dispuesto a luchar con ellos si es preciso en las calles, por defender la libertad y sostener el orden.

Estos no son palabras, son hechos; y yo, que en este punto no tengo un valor supuesto, sino una honra de servicios acreditada, espero tranquilo el fallo de la opinión pública y de la Milicia ciudadana; hagan meritos otros que los necesitan, que yo por mi parte no tengo necesidad de ello.

Dicho esto, que me importa, porque yo no podía en mi carácter de representante del país atacar directamente ni indirectamente a la existencia y a los derechos de esos honradísimos ciudadanos que abandonando sus hogares y sus familias han sido de cinco años a esta parte el más firme sosten de la libertad y del orden, dicho esto que nada podía yo manifestar que se prestara a interpretarse malamente por ellos; paso a otro punto.

Hay, en efecto, otro punto de vista que tratar, de índole más general y que no envuelve deso alguno de ejecutar ningún acto de oposición al Gobierno. El Sr. Castelar ha dicho constantemente que la república era la única forma de gobierno dentro de la cual cabían todas las opiniones, todos los derechos, todas las clases y todos los intereses; y esto lo ha manifestado, no solo aquí, sino también en su *Memorandum* a las naciones extranjeras. Pues bien, si todos los intereses, si todas las clases sociales, si todos los partidos políticos caben dentro de la forma republicana, cosa que yo también creo; si la actividad de los partidos aquí y fuera de aquí ha demostrado que están dispuestos a prestar su leal concurso a la nueva forma de gobierno, no tienen derecho todas esas clases, todos esos intereses y todas esas opiniones a que se conviertan en hechos de oposición al Sr. Castelar? ¿Es camino oportuno para llegar a ese fin hacer distinciones entre las unas y las otras, y engendrar entre ellas un odio del cual sería consecuencia necesaria una lucha que yo espero que no ha de venir, pero que si llegara había de dar el triunfo a la inteligencia?

Así, pues, si con hechos han de confirmarse las palabras del Sr. Castelar; si no queremos establecer divisiones; si el Gobierno entiende que necesita del

concurso de todos para fundar una forma de gobierno estable; si el Sr. Castelar da algo más al porvenir que al presente; si prefiere la consolidación de la república al efímero y pasajero triunfo de haber sido el fundador de la forma republicana; si, en fin, piensa en ese banco como pensaba en estos, haga de modo que sin perder el prestigio entre sus amigos, no aleje de sí el elemento alguno de gobierno y trate, por el contrario, de atraerlos a todos. Tenga el Sr. Castelar en el banco azul la misma dignidad que en la oposición. El Sr. Castelar, que ha sabido oponer su elocuencia al torrente, desbordado a veces, de la demagogia, debe ser prenda de paz y de orden: aquel que tuvo valor suficiente para oponerse a exigencias absurdas cuando no tenía sobre sus hombros la inmensa y grande responsabilidad de regir los destinos de la Nación, debe hoy demostrar su firme propósito de sostener lo que antes sostenía y de ser prenda de orden y sensatez para este país, asegurando para la sociedad paz y sosiego. Así lo espero de S. S. y de sus amigos.

El señor ministro de ESTADO: Hago completa justicia a la rectitud de miras y a la lealtad de intención con que ha procedido mi amigo el señor marqués de Sardoal dirigiendo esta interposición al Gobierno. El lenguaje mesurado y templado de que se ha valido, me obliga a imitarle en esto a mí, que uso en todas ocasiones un lenguaje mesurado, y que debo emplearle mesuradísimo desde este banco, en que no represento a un partido, sino a todas las clases, a toda la Nación.

Yo pido a todos los representantes de la Nación, yo pido a todos los partidos de la que desde el primer día que me senté en este banco he venido pidiendo, el *delenda Carthago* de los antiguos, se reduce para mí a esta forma prosaica y sencilla: tranquilidad, serenidad, paz, confianza. Uno de los síntomas mejores que para mí presentaba la revolución de Setiembre, era que las cuestiones de Milicia nacional no han apasionado en este período como apasionaron en períodos anteriores.

Yo me acuerdo del espectáculo que en los años de 1854 a 1856, por cuestiones de Milicia nacional, ofrecía muchas veces Madrid, y en la Cámara; hubo ocasión en que por sí la Milicia nacional, como fuerza armada, tenía o no derecho de petición, se alteró el orden público, y las discusiones de esta Cámara tomaron un aspecto tempestuoso. Hubo un diputado, que ya ha muerto, que se desmayó en aquel asiento, y el oleaje de aquellas turbas se acrecentaba, en términos que no parecía sino que del derrotero de política se había pasado a la política de la tranquilidad y la salud de la patria. Pues bien, esto no ha sucedido después de la revolución de Setiembre. La Milicia nacional ha tenido conflictos que no quiero recordar; en muchas partes ha sido desarmada, sin que ningún ciudadano haya creído que al perder el fusil perdía sus derechos, considerándolos suficientemente garantidos por el título primero de la Constitución del Estado.

La república se ha fundado, está definitivamente establecida, y yo sentiría que en el camino de la república, cuando la república está definitivamente establecida, y con la república un Gobierno de derecho y de libertad, las cuestiones de fuerza tomaran un aspecto y una importancia que no han tenido en tiempos de la monarquía. Así es que yo no puedo menos de preguntar una cosa: ¿hay derecho en las clases que se llaman conservadoras, para desconfiar del pueblo? ¿Hay derecho de los conservadores de las clases conservadoras? Concretando el punto a Madrid, yo no he tenido nunca, como el señor marqués de Sardoal, la honra de representar al pueblo de Madrid; no he sido tampoco su alcalde, ni he desempeñado cargo alguno de su confianza; cuantas veces me he presentado delante del pueblo de Madrid en los comicios, otras tantas he sido derrotado. Sin embargo, tengo que decir una cosa del pueblo de Madrid, de esas clases que empujan con su sudor la tierra ó los instrumentos de la industria, después de haber recorrido varios pueblos de Europa, estoy orgulloso de ser ciudadano de esta gran ciudad, que sabe aliar tan perfectamente el orden con la libertad.

¿Ah, por qué circunstancias ha pasado el pueblo de Madrid! Abandonado así mismo en 1854, comparado, sin embargo, aquella revolución, a pesar de que tenía algunos sombras, comparada con otras revoluciones extranjeras. En el año de 1858, no hay seguridad, no hay ejército; las puertas del Parque se abren; la monarquía, institución de tantos siglos, se va, y el pueblo se encuentra entregado a sí mismo. ¿A quién faltó el pueblo de Madrid? ¿Qué domicilio violó? ¿Qué venganza tomó?

Gloria, pues, al pueblo de Madrid, que al recordar sus derechos después de tantos desastres y sufrimientos, sólo se acuerda de extender sus brazos para estrechar en ellos a sus mismos enemigos. En días recientes, al pasar de un organismo antiguo a otro moderno, que ha faltado el pueblo de Madrid? ¡Ah! Yo recuerdo, y en este sitio es deber mío y de todo hombre honrado no ocultar nada, que ha habido algunos pelotones de hombres armados, producto de lo extraordinario de las circunstancias; pero esos hombres se han presentado diciendo que iban a sostener la propiedad y la propiedad, en un caso extraordinario de las circunstancias ha pasado todo ha concluido, dando el pueblo de Madrid nueva muestra de una sensatez, de una cordura y una prudencia que debe agradecerle España y que le agradecerá de seguro la historia.

Y si esto decimos del pueblo, yo pregunto: ¿tiene el pueblo derecho a desconfiar en Madrid de las clases que se llaman conservadoras, título que considero poco propio? Lejos de esto, el pueblo debe mostrarse agradecido a esas clases, porque si no hubieran congregado en torno de la monarquía que ha desaparecido, contribuyendo a darle fuerza y esplendor, es seguro que a estas horas D. Amadeo de Saboya permanecería aún entre nosotros. Si aquí hay, pues, ideas, sentimientos, principios en los cuales las clases conservadoras y el pueblo se encuentran en unión perfecta y en armonía indestructible, ¿por qué desconfiar el pueblo de las clases conservadoras ni estas del pueblo? La verdad es que cuando los medios de manifestarse la opinión pública se han ido, hay imprenta, tribuna, comicios; cuando por ellos y con el sufragio universal se puede llegar a todas las altas transformaciones políticas y sociales, nadie absolutamente debe pensar en la fuerza, y los que en ella piensan dan en esto un signo de su propia debilidad.

Hace pocas noches que me he ocupado en leer uno de los grandes maestros de la política práctica. Aristóteles, que ya en su tiempo hablaba de disensiones entre las clases populares y conservadoras, y decía con este motivo aquel verdadero fisiólogo de la sociedad lo siguiente, que yo recomiendo a todos los representantes de la Nación: «¡Ah! si las clases populares supieran, serían siempre el escudo de las clases conservadoras. ¡Ah! si las clases conservadoras supieran, serían siempre la tutela y la providencia del pueblo.» ¿Há aquí lo que se necesita y lo que no se debe nunca olvidar.

¿Pero es que ha habido movimiento en las clases conservadoras para intervenir en la vida pública? ¿Se ha realizado ese movimiento, aunque sólo sea para armarse, que es lo último para lo que le debían realizar? Pues yo no me atrevo; yo voy en esto a un tema de que esas clases van sacudiendo su inercia y su pereza, de que se van acordando que necesitan los derechos individuales para intervenir en la vida pública.

Al realizar ese esfuerzo de valor, le tendrán también luego para presentarse desarmados en los comicios, con el objeto de llevar sus hombres al Parlamento, donde sostengan sus intereses, sus ideas, sus tradiciones. Esto podrá ser anormal; lo es indudablemente dentro de la ley, y voy a llegar a ese punto; esto podrá ser anormal, pero esto, en lo que a mí me toca, me satisface; no me alarma, porque, dentro de todo, si hubiera conflictos, que no los habrá, ni creo que es parlamentario hablar aquí de luchas, de guerrillas ni de batallas; si hubiera conflictos, digo, la república sostendría su derecho dentro de la legalidad.

Y llego ya a la cuestión concreta: nosotros teníamos dos grandes cosas que hacer desde el momento en que ocupamos el poder; apaciguar a los que temían y satisfacer a los que esperaban. Hemos apaciguado a los que temían; la confianza renace, en la seguridad de que, cualquiera que sean las dificultades que se presenten, se han de resolver por el criterio legal.

Sobre una cosa llamo la atención de las Cortes, y no he de dar más explicaciones aunque se me pidan, porque al Gobierno no se le puede negar el derecho al silencio; si aquí hay algo alarmante y perturbador, no está dentro de lo que se llaman puras instituciones

del Gobierno.

Pero colocada esta situación entre una Asamblea soberana y una Asamblea constituyente, ¿qué debe hacer? Cumplir estrictamente las leyes. Nosotros no las hemos hecho, no las hemos prolongado; pero esas leyes están aquí, y entre ellas la Milicia nacional. Mis antiguos compañeros del último Gabinete saben, y estos podrán dar testimonio, de que en cuanto recibimos la primera noticia de haberse constituido una Junta revolucionaria y de haber disuelto Ayuntamiento, nosotros en nombre de la ley, y como la ley no se había velado un solo momento, disolvimos esas Juntas y reivindicamos el derecho que tenían esos Ayuntamientos a continuar en sus puestos. Después de esto ¿se quiere que prescindamos ahora de cumplir la ley en lo relativo a Milicia nacional?

Pues no podemos prescindir de la ley, y yo estoy dispuesto a sostener hasta el último momento la autoridad de las leyes. Tenemos en el Gabinete un hombre acostumbrado a aplicar la ley como un magistrado, ese hombre ha dicho que él entiende que para armarse hay que someterse a la ley y cumplirla. Esta es la conducta del Gobierno, y en ella es absolutamente inatacable. Pero tratemos la cuestión bajo otro punto de vista. En los países más civilizados, todo ciudadano tiene derecho de armarse; prescindiendo de que a pesar de este derecho se exige una contribución al que compra y tiene un arma, y que por consiguiente ha de dar parte a la autoridad de que la tiene. Pues bien; derecho de comprar un arma, indudable; el de reunirse sin ellas, perfecto; reunión con armas, ilegal, y el Gobierno debe disolverla. Desde el momento que una fuerza se organiza debe someterse a la ley; y he aquí trazada claramente la conducta del Gobierno.

Voy a concluir diciendo una cosa. Es necesario que nadie se alarme; hacen mal los que, sin más patrimonio que su trabajo, predicando entre las clases populares, pero hacen mal también estas clases, que menosprecian desde las alturas de su fortuna a lo que ellos llaman la plebe.

Es necesario, señores, una armonía perfecta entre las clases conservadoras y el pueblo; que todos comprendan que la república y la democracia es el camino para llegar a todas las grandes cosas políticas y sociales, pero siendo en el centro de sus principios, funciones electivas, han de ser llamados a ellas los mejores. Procediendo así las clases conservadoras, tengan la seguridad de que no habrá sospechas ni odio en el pueblo, y mucho más por cuando después de la experiencia adquirida y de los conflictos por que hemos pasado no se lleva una herida, es de todo punto necesario crecer en la virtud, en la moralidad, en el buen sentido de ese pueblo.

Yo recuerdo, mis antiguos amigos, que hoy tendréis más autoridad que nosotros, porque no os habéis gastado en las ruedas del poder; vosotros, creedme, es necesario elevar al pueblo, elevar su ideal y su inteligencia, y decirle: no quieras ser oprimido por que hayas sido tiranizado; llama hermanos a los mismos que te han llamado enemigos, y sonreírán días más paz y felicidad en el mundo de nosotros. (Aplausos prolongados.)

El Sr. OLAVE: Valor se necesita, y muy grande, para dirigirse a la Cámara en el estado en que se encuentra, después del más ilustre de los oradores de la tribuna española, que por hablar hoy además como hombre de gobierno, ha excitado la atención de la Asamblea con el doble interés de esta circunstancia, unido al que despierta su siempre elocuente palabra.

El entusiasmo me obliga a tener que volver, por el deseo de achicar con mi propia insignificancia las proporciones de un debate que las ha tomado muy grandes, pues hay momentos en que conviene empujarse las cuestiones.

Ha dicho el señor marqués de Sardoal que no venía a ser representante de una clase social, sino de los intereses de todas las clases de la sociedad; y al decir esto, Sr. S., ensanchando así la órbita del debate, se aproxima muchísimo del objeto principal de su interposición, pues el otro día al levantarse nos dijo que venía sólo a defender a los alcaldes de barrio, cuya clase me parece que dista mucho de constituir la sociedad entera.

¿Ciñamos, pues, la cuestión a sus límites naturales, reconociendo que se trata de una clase determinada, de los alcaldes de barrio. Yo ante todo debo hacer una declaración: creo que no debe hablarse ya de procedencias políticas, que estas han debido desaparecer entre nosotros desde el día en que proclamamos la república; pero ya que el señor marqués de Sardoal quiere representar una procedencia, yo, con igual derecho que S. S., puedo hablar en representación de la misma, poniéndome al lado del Gobierno de la república, con tanta lealtad como firmeza.

Respecto a la cuestión, sólo deseo conste que los alcaldes de barrio han abusado de su autoridad interponiendo en la reunión de los vecinos los procedimientos, no como ciudadanos, sino invocando el título de tales alcaldes. Para probarlo, basta leer la papeleta de invitación que algunos han dirigido, y dice así: «Los vecinos del barrio de... invitados a celebrar una reunión con objeto de organizarse, etc.» Y firma el alcalde del barrio.

Pues bien; yo niego en absoluto que un alcalde tenga para hacer esto la facultad de que carece el Ayuntamiento. Cuyas atribuciones se hallan perfectamente limitadas y reguladas por la ley.

El Sr. CARMONA: Voy a decir muy pocas palabras; pero como quiera que el señor marqués de Sardoal, de quien tan gratos recuerdos conserva la Milicia por el tiempo que fue su comandante general, ha hablado de protestas de la fuerza ciudadana, yo tengo que referir la verdad de lo ocurrido.

Hace tres días que la actual Milicia de Madrid, representada por los jefes de los batallones, se me acercaron diciendo que querían tener una reunión para tratar del armamento de los vecinos honrados; tuvo en efecto lugar la reunión de esos jefes, y sin tratar de intervenir en lo más mínimo en que los vecinos se armen o no, dijeron que sólo hacían una protesta, que yo considero justísima. La Milicia de Madrid, que siempre ha estado propicia, y no hay que hacer su historia, pues si la Milicia la ha dejado el señor marqués de Sardoal, no lo es menos la de esa fuerza que S. S. conoce mejor que nadie, y a cuyo frente he estado yo, y por ella he hecho muchos esfuerzos; la Milicia de Madrid, digo, que muy recientemente se presentó a los señores presidente del poder ejecutivo y de la Asamblea, ofreciendo sostener el orden a todo trance, tiene razón para extrañarse que se apartaran esos vecinos que se arman de una corporación que está tan bien dispuesta. La Milicia, pues, no protestaba, sino que hacía ver que lleva cuatro años manteniendo el orden y la libertad, como está dispuesta a seguir haciéndolo siempre, apoyando al Gobierno.

El señor marqués de SARDOL: Voy a rectificar brevemente.

Con razón decía yo antes que si sólo del Sr. Castelar se tratara no necesitaba hacer la interposición, pues conozco muy bien cómo piensa y siente S. S.; pero el Sr. Castelar es hoy algo más que el antiguo orador de la oposición; es el representante del Gobierno. En este concepto, hay entre las declaraciones de S. S. una muy importante. Decía S. S.: «A mí no me alarma, a mí no me parece ilegal la asociación de los vecinos de esta ciudad para defenderse, si es necesario, en la necesidad de vivir la vida nueva, la necesidad de asociarse y entenderse, como garantía, como sanción del libre ejercicio de sus derechos políticos».

Y añado S. S., que lo mismo piensan el señor presidente del poder ejecutivo y el Sr. Pi, que ocupa en el Gabinete un puesto esencialmente político, y el Sr. Sorri. De modo que aquí resulta una cosa: que todos los ministros piensan que no hay por qué alarmarse por ese movimiento del vecindario de Madrid, y sin embargo, la opinión de la Milicia no es lo resultado de las opiniones individuales; que hay un pensamiento colectivo que no es la representación del pensamiento de cada uno; que hay una presión, una influencia. ¿Dónde está? Si está fuera del Gobierno, ¿dónde radica? Se dice que en la ley. ¿Sublime puritanismo!

Voy a ocuparme de la ley; pero antes diré al señor Castelar, que se extraña de que yo hubiera hablado de guerrillas, que yo usaba la frase en sentido de parlamentario, y recuerdo S. S. que yo la usaba después de haber oído al Sr. Figueras la de *desarmado*, que no me pareció ni muy culta ni muy parlamentaria.

El Sr. Castelar ha aludido a la ley de organización de la Milicia, de la fuerza pública. Yo no niego

al Gobierno el derecho de organizar la fuerza pública; pero sostengo que no es fuerza pública la que se organiza en Madrid, sino fuerza privada.

Se trata de una asociación para llevar a los asociados recursos materiales, si los necesitaran, ni más ni menos que los *Amigos de los pobres* se asociaban para llevar auxilios y medicinas a los menesterosos. El Sr. Castelar conviene sin duda en que cada ciudadano tiene derecho a tener un fusil en su casa; pero dice que debe pagar una contribución. Rñorabuena, que pague. Mas la ley se refiere al uso de armas, y la propiedad de un arma no significa el uso de ella. Yo, como alcalde de Madrid, he dado licencias de uso de armas cuando se pedían para cazar; pero jamás se me ha ocurrido que pudiera imponer sobre el uso de un arma como cualquiera otro mueble. De suerte que lo que se impone es el uso, y por tanto, hasta que el uso se verifica no hay por qué imponer.

Góbrese un buen hora el impetuoso; y yo pregunto: ¿quiere el Gobierno exigir la patente de uso de armas a los grupos que han estado prestando a Madrid un concurso que no necesitaba y que no ha solicitado? ¿Tienen la patente esos grupos? ¿Cuál era su organización? ¿Tenía de ella noticia el Gobierno? Yo no he querido hacer uso de este argumento; pero el señor ministro de Estado ha entrado en ese terreno, y me voy precisado a seguirle.

Su señoría ha insistido en esa eterna división entre la plebe y las clases conservadoras, y ha dicho que ni las clases conservadoras debían desconfiar del pueblo, ni el pueblo de las clases conservadoras. Señores, aquí no se arman los conservadores; se arma el pueblo, pobres y ricos, artesanos y capitalistas, y hasta el Sr. Suñer y Capdevila se ha alistado en su barrio. (El Sr. Suñer y Capdevila pide la palabra para una alusión personal.)

Antes de ayer se reunieron varios ciudadanos de las calles de la Comadre y Calatrava, y fueron disueltos por grupos armados. ¿Creo S. S., que habian pagado su licencia de uso de armas estos caballeros disueltos?

Que no hay motivo para temer. El miedo es una cosa que no se mide. Yo voy a algunos que van cargados de armas, mientras que yo no llevo nunca ninguna; pero esta es una cuestión de carácter y nada más. Los vecinos de Madrid tienen el derecho de tener todo el miedo que quieran, y lo grave es que este miedo se justifica a veces. Esta mañana, una turba ha atacado una casa; los vecinos, que ya estaban prevenidos, han contestado con una descarga y ha muerto un facineroso. Vea S. S. si hay algún fundamento para temer.

En cuanto al pueblo de Madrid, no podrá menos de agradecer al Sr. S. el tanto que en loor suyo ha elevado esta tarde, sin embargo de que su sensatez está reconocida, y una muestra de ello es la actitud que toma para defenderse de agresiones injustas e ilegales.

Ha dicho S. S. que nada ocurrió el año 68, a pesar de que no se tomaron las precauciones que hoy se toman. Esto consiste en que la opinión pública se creyó segura entonces. Había en aquella época tres partidos coaligados en el poder, un ejército organizado, dos generales con gran prestigio, una organización fuerte y vigorosa en todo, y en Madrid había un alcalde cuya energía y actividad se sobreponía a todo, y el vecindario descansaba tranquilo. Pero hoy las cosas no son así, y entonces el sentimiento individual de defensa se abre paso y revierte una forma de desconfianza en el poder, y en la ley del Lynch en Norteamérica, que se llama asociación de los Constables en Londres, y que se llama en Madrid asociación de vecinos honrados.

Yo ruego al Sr. Castelar que no abra abismos entre clase y clase, que no establezca diferencia entre el pueblo y la clase media. Todos somos pocos para salvar la libertad. Ha venido aquí la república como en Francia, como primera explosión de una idea de largo tiempo comprimida, después del fragor de la lucha y dispuesta a declarar a los tiranizados y agraviados. ¿Había en España, después del 1.º de Febrero, una aristocracia que monopolizaba la administración del Estado? ¿Había una Iglesia que arrebatase la propiedad a la circulación? ¿Había venido la república a resolver grandes problemas sociales y económicos, y a fundar la democracia que desde el año 69 está en nuestra Constitución? No.

Pues entonces, ¿qué ha venido? ¿Lo que decía el Sr. Castelar. A una figura común para que dependiera sus odios los españoles, pudieran sin mengua de nadie vivir juntos aquellos que estaban separados por el abismo de un candidato al trono. Pues bien; es conveniente establecer los paralelos que S. S. ha establecido?

Repito que no he venido, y créame S. S. bajo mi palabra de caballero, a hacer un acto de oposición. Sino a demostrar que los vecinos de Madrid están dentro de un derecho perfecto.

Yo no encuentro ninguna ley que les prohíba hacer lo que están haciendo, ni sé que haya en ello delito ni pena. Se trata de una organización que vive dentro de la ley, que no tiene fin político, y que no puede regirse por el criterio por que se rige la Milicia, porque no es Milicia ni aspira a serlo.

De lo dicho por el Sr. Carmona, saca en consecuencia que la Milicia de Madrid no ve con disgusto que de sus causas los ciudadanos estén dispuestos a defenderse.

Y voy a concluir, con las siguientes preguntas que exigen una contestación categórica, afirmativa o negativa: ¿es lícita la asociación de los vecinos honrados, o mejor dicho, de los vecinos todos, porque pueden pretender alistarse los que sean honrados y los que no lo sean? Buen cuidado tendrán los que no lo sean de averiguar si son realmente honrados los que desean alistarse en la asociación; y si no lo son, los vecinos harán una división más justificada que la que ha hecho el Sr. Castelar entre el pueblo y la clase media. (Una voz: No.) ¿No? Pues vaya en tan buena compañía el que lo solicite. Yo, por mi parte, prefiero ir solo. ¿Entiende el Gobierno que es lícita la reunión de vecinos para las fines que todos conocemos? ¿Piensa el Gobierno no oponerse directa ni indirectamente a que esa organización se lleve a cabo? ¿Está dispuesto a dar a los ciudadanos toda clase de garantías para que puedan hacer uso de su derecho? Yo estimaría que el Sr. Castelar me conteste de una manera satisfactoria. (Aprobación.)

El señor ministro de ESTADO: Declaro que no soy de ánimo tan fuerte como el señor marqués de Sardoal. Su señoría tiene la suficiente posesión de sí mismo para pronunciar discursos de oposición, y yo no la tengo para pronunciar discursos ministeriales. ¿Esta es forma de gobierno! Aquí no hay la autoridad de un Rey que resguarda; lo que el Gobierno debe defender desde aquí es la autoridad, la ley y el orden social, y no esta causa a costa de los derechos de la oposición, y yo acepto esa responsabilidad. Pero ¿no han sucedido miles de accidentes? ¿Valía la pena de recordarnos el accidente de esta mañana? ¿Qué ha sucedido? Que han tenido noticias los vecinos de una casa de que iban a ser atacados por facinerosos, han pedido socorro, ha ido la policía, ha encontrado siete ladrones y ha muerto a uno de ellos.

Yo he vivido algún tiempo en Suiza; allí todo ciudadano es soldado, pero no puede salir a la calle armado sin la orden competente de la autoridad superior. En los Estados Unidos, todo ciudadano tiene derecho a tener una arma, pero está bajo la dirección de la autoridad. Estos elementos, y no quiero recordar las cosas que han sucedido en estos cuatro años de gobierno tan fuerte de que nos hablaban S. S. La responsabilidad que lleva esta causa a costa de los derechos de la oposición, y yo acepto esa responsabilidad. Pero ¿no han sucedido miles de accidentes? ¿Valía la pena de recordarnos el accidente de esta mañana? ¿Qué ha sucedido? Que han tenido noticias los vecinos de una casa de que iban a ser atacados por facinerosos, han pedido socorro, ha ido la policía, ha encontrado siete ladrones y ha muerto a uno de ellos.

Y ¿qué esto no sucedía en tiempo de la gloriosa Monarquía? Con esto, señores, no se hace más que alzar el fuego. Amantes de la autoridad ¿qué respeto tenéis a la autoridad de esta Asamblea? (Aplausos.)

Y voy a contestar a S. S. Todo ciudadano tiene derecho a poseer un arma; la organización de la fuerza está sometida a la autoridad de las leyes, y todos tienen el deber de someterse a su autoridad.

El Sr. marqués de SARDOL: Quedo satisfecho de las palabras del Sr. Castelar. Todo ciudadano tie-

ne el derecho de poseer un arma, ó las que quiera, y seguramente para hacer uso de ellas en su defensa; todo ciudadano tiene el derecho de asociarse para fines lícitos; la organización de la fuerza pública depende del Gobierno. Yo lo estimo así también. La existencia de lo que no es fuerza pública está fuera de la acción del Gobierno.

El señor ministro de ESTADO: Conviene la claridad. Todo ciudadano tiene derecho de asociarse sin armas; toda asociación armada debe ser disuelta por la fuerza pública; todo ciudadano tiene derecho a poseer un arma; la organización de la fuerza pública y de las asociaciones armadas compete, no al Gobierno, sino a algo que está sobre el Gobierno: a las leyes.

El señor marqués de SARDOL: Mucha claridad pide el Sr. Castelar, y mucha claridad pedimos todos. Todo ciudadano tiene el derecho de poseer una arma; todo ciudadano tiene el derecho de asociarse sin armas; todo ciudadano tiene el derecho, una vez asociado, de proponer aquello que no se oponga a la moral y al derecho.

Pues bien; los ciudadanos tienen las armas en sus casas, y el Gobierno ignora esto, ó lo debe ignorar.

Acuerdan, una vez reunidos sin armas, completamente inermes, acordar caso de peligro: si yo vivo, por ejemplo, enfrente del Sr. Castelar, y voy a su casa se halla atacada, como es más fácil que yo desde enfrente tire al que se cobija a la puerta de S. S., tiro; yo no me asocio; y si en mi casa acontece otro tanto; S. S. tira; esto, por lo que se refiere a dos ciudadanos; ya hay pluralidad. S. S. y yo; hay asociación; la ley no fija el número de asociados. Todo esto que hago yo con S. S., lo hace S. S. con todos los vecinos de su calle, y así se van estableciendo combinaciones hasta lo infinito, sin hacer uso de las armas fuera de su casa y sin asociarse armados. (Aprobación.)

El señor ministro de ESTADO: No osamos ergotistas, porque eso demuestra que no hemos perdido, a pesar del plan filosófico de estudios que aquí ha dominado mucho tiempo y que tuvo su nombre celebre, las tradiciones escolásticas. Hay un derecho perfecto de inviolabilidad del domicilio; mi casa es de la señor marqués de Sardoal, entra para apagar el fuego; le parece bien que yo lo llevara a los tribunales por haber violado mi domicilio? No tengo que decir más que una cosa: el Gobierno respetará todos los derechos escritos en la Constitución, y hará cumplir, a pesar de todos y contra todos, la autoridad de las leyes. (Aplausos.)

El Sr. SUÑER Y CAPEDEVILA: Si esta cuestión no hubiera tomado el forma política, que ha tomado, aun aludido por el señor marqués de Sardoal, no hubiera hecho uso de la palabra; pero ya que de la esfera particular ha pasado a la política, yo me voy precisado a explicar la causa de haberme alistado en mi calle.

Yo vivo aislado, apenas acudo a ningún centro, y me encontré en mi casa con una papeleta en que se me decía que para la defensa del orden, de la patria y de la familia se me citaba para que a las ocho de la noche asistiese a una casa determinada de mi distrito.

Yo, aunque soy republicano, mejor dicho, porque soy republicano, soy partidario y amante del orden, de la familia y de la propiedad. Creí que no había inconveniente en que concurrese a ese punto. Vi allí mucha gente reunida, no en asamblea, sino en reunión de familia; y me acordé de haberme inscrito en una lista de nombres, y dije que se pusiera el mío. Después he venido observando todo ese movimiento extraordinario, y que esa cuestión, a mi entender tan sencilla al principio, ha tomado vuelo.

Yo entiendo que los republicanos deben someterse a ese alistamiento, sin tomarlo a mala parte; y creyendo, como creo, que los republicanos estamos interesadísimos en formar parte de estos alistamientos, entiendo que esto convendría al interés de nuestro partido; porque así, si hay algunos que no siendo republicanos han tenido intención de explotar esto de los alistamientos, como se ha tratado de explotar la Liga, podemos, hallándonos nosotros dentro de esas asociaciones, estar con el ojo abierto para desbaratar los planes de los enemigos de la república.

Dadas estas explicaciones, comprenderá la Asamblea, y especialmente el señor marqués de Sardoal, la necesidad de decir mi opinión respecto de la legalidad de estos alistamientos; insisto con intención en la palabra *alistamientos*; mientras no pase de alistamientos, creo que son legales; cuando pasen de alistamientos y tomen forma de organización, que esto es distinto de alistamiento, entonces dejaré de ser legal y el Gobierno tiene el derecho de impedirlo.

Hecha la oportuna pregunta, acordó la Asamblea pasar a otro asunto, y empezó a discutir el proyecto de armamento de voluntarios, usando de la palabra en contra el Sr. Gándara.

El Sr. Socias defendió el proyecto y el general Gándara rectificó.

El segundo turno en contra fue consumido por el Sr. Sanz.

La sesión se levantó a las siete menos cuarto.

## VARIEDADES

### LA ESTAFETA DE PALACIO

Si el torbellino de las pasiones políticas no lo invadiera todo; si a las agitaciones del momento pudiera suceder el reposo de las ideas preocupadas con otras cosas, se fijaría la atención del público en una obra interesante, que, aunque muy propagada, leída y apreciada, no ha llegado a obtener la aureola que han merecido otras producciones de mérito que la de que nos ocupamos.

Nos referimos a la *Historia del reinado de don Isabel II*, que escribe D. Idefonso Bermejo con el título general de *La Estafeta de Palacio*. Van publicados dos tomos y algunos cuadernos del tercero, que dedica el historiador al Príncipe Alfonso.

El Sr. Bermejo escribe la historia de su augusta



